

Las oportunidades de la crisis: ¿una respuesta liberal?

Lo que escribe Ralf Dahrendorf siempre tiene las ventajas de una sensibilidad especialmente permeable a las transformaciones sociológicas y a los cambios políticos que éstos originan. Profesor de sociología en diversas universidades alemanas y destacado miembro del FPD, Dahrendorf formó parte de la Comisión de las Comunidades Europeas, y es desde 1974 director de la prestigiosa London School of Economics. Un inmejorable *pedigree* avalado por sus renovadores estudios sobre el conflicto de clases en la sociedad industrial y las relaciones entre sociedad y democracia en Alemania.

Pues bien: Dahrendorf nos propone ahora (en sus últimos libros publicados recientemente en castellano *) una posible salida a la crisis por la que atraviesan las sociedades occidentales; una solución que para él se identifica ideológicamente con una nueva fundamen-

* Se trata de *Las oportunidades de la crisis*, Madrid, Unión Editorial, 1983, y de *Oportunidades vitales. Notas para una teoría política y social*, Madrid, Espasa-Calpe, 1983. La palabra originariamente francesa *chance*, y actualmente utilizada tanto en inglés como en alemán, no es lógicamente reproducida fielmente por la traducción castellana «oportunidad».

tación del liberalismo y estratégicamente—lo que no deja de ser significativo— con la política de centro-derecha del canciller Kohl.

Dahrendorf detecta un cambio en la cultura política occidental: el final de la era socialdemócrata. «Socialdemócrata» no hace aquí en principio referencia a ningún partido político concreto —son distintas las tendencias que habrían contribuido a configurar la época que ahora queda tras nosotros—, pero es evidente que el Estado-providencia tuvo sus mejores momentos con gobiernos socialistas moderados. Las pautas del siglo social y democrático han acabado siendo aceptadas por todos, hasta el punto de convertirse en obviedades los aspectos que definen la era que ahora termina: crecimiento, igualdad, trabajo, razón política, Estado e internacionalismo.

La tesis es que son éstos justamente los valores a los que la realidad actual en el mundo de la OCDE ya no responde.

El aspecto más llamativo es, sin duda, el problema del crecimiento. Estamos al final de un período histórico en el que el proceso económico ha dominado todos los restantes sectores de la vida social. La utopía del progreso como cre-

cimiento ilimitado se tradujo en posibilidades infinitas de mayor bienestar económico. Si este crecimiento no se produce de hecho, tal y como está ocurriendo ahora, la menor de las consecuencias es la frustración de las expectativas creadas. Las instituciones políticas y económicas, los valores y símbolos sociales, en definitiva, las legitimidades acendradas, parecen entonces girar en el vacío.

Lo curioso es que es el propio sistema el que acelera el proceso. Aquello que hasta hace bien poco era origen de riqueza y consumo, es causa ahora de que se llegue al «crecimiento negativo». Los motivos fundamentales del estancamiento actual —costes crecientes y mercados decrecientes— son, paradójicamente, consecuencia de la expansión y de su ritmo.

Es indudable que la expansión ha existido. Los veinte años anteriores a la década de los cuarenta en Estados Unidos, y a partir de los años cincuenta en los países europeos, registran un crecimiento económico literalmente histórico. En Alemania, por ejemplo, el PIB se multiplicó en sólo veinticinco años por tres y las rentas reales se cuadruplicaron; en los demás países de la OCDE la expansión fue similar. Durante todos estos años la incógnita se reducía a saber en cuánto aumentaría el PIB: si un 4, un 5 ó un 6 por 100. Se contaba con que los beneficios empresariales y las inversiones crecerían a un ritmo exponencial y que las rentas reales de las personas físicas se moverían muy por encima de la tasa de inflación.

Pero tan obvios como los datos del crecimiento lo son los de la crisis: hundimiento del sistema monetario internacional en 1971, los «límites del crecimiento» en 1972, la primera crisis del petróleo en 1973. Se empieza hablando de una mala situación coyuntural, de una ligera inflexión en las curvas ascendentes del crecimiento; después se in-

troduce el concepto de recesión, y al final todo el mundo habla de que nos hallamos ante una depresión dentro de un nuevo ciclo económico bastante más largo de lo que creíamos.

El problema es que el crecimiento se ha hecho tan caro, que aquellos que deberían impulsarlo ya no se atreven a hacerlo y en muchos casos tampoco están en situación de permitírselo. Los nuevos costes se deben sin duda al aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, pero el coste mayor es la «plusvalía» que se lleva el Estado. Son precisamente las grandes conquistas del Estado-providencia —la expansión de la Seguridad Social y la redistribución de la renta utilizando instrumentos fiscales— las que en gran medida frenan la inversión y las posibilidades reales de beneficio empresarial. A ello se añade la falta de flexibilidad en la contratación.

La cuestión se agudiza porque el Estado ya no puede financiar las tareas que ha asumido. Se llega a un límite en el que, al mismo tiempo que disminuyen los ingresos, aumentan los costes de las prestaciones estatales. El endeudamiento público no puede ir más allá de ciertos niveles, aunque sólo sea por la quiebra de la confianza internacional que un déficit excesivo origina. Incluso en el caso de que no se admita la famosa curva de Laffer, según la cual a partir de un determinado punto de inflexión un aumento de los impuestos produce de hecho una disminución de las sumas recaudadas, existen ya los suficientes ejemplos —el «modelo sueco», sin ir más lejos— que nos indican cómo la gran ubre estatal también tiene sus límites.

El problema de fondo es la inviabilidad del concepto tradicional de bienestar. Las prestaciones sociales tienden inexorablemente a aumentar el umbral de las necesidades que se espera satis-

faga el Estado benefactor. Puede ser que se trate de necesidades perfectamente legítimas —la medicina preventiva, por ejemplo—, pero las posibilidades de sofisticación de las mismas son —éstas sí— ilimitadas.

Por otra parte, el objetivo de la política social —la redistribución de la renta en beneficio de todos los ciudadanos— no siempre elude sus propias contradicciones. El enorme aparato burocrático acaba siendo incapaz de solucionar los problemas individuales que pueden plantearse, hasta el punto de producirse situaciones verdaderamente divertidas. Se demuestra que la capacidad de las burocracias en aplicar el principio de incompetencia escapa a la imaginación más ardiente.

Ante la crisis del Estado-providencia, Dahrendorf aboga por una alternativa no radical. Reducir el problema a la disyuntiva entre prestaciones sociales o privatización es —cuanto menos— una simplificación. Evidentemente, en muchos ámbitos resultaría saludable dar paso a una mayor contribución individual, por ejemplo, a través de un sistema de seguros individuales en los que la responsabilidad no quede diluida en «el Estado». Pero tampoco se puede olvidar que uno de los elementos claves de las intervenciones del Estado social es garantizar un nivel digno de vida y de desarrollo de la personalidad a los socialmente más débiles. En este sentido, uno de los mayores interrogantes que la experiencia radical de la señora Thatcher y el presidente Reagan tienen aún por resolver es el de las prestaciones sociales. Quizá un sistema combinado de ayudas estatales mínimas y de aportaciones personales sea el término medio por el que haya que empezar a caminar; también el sistema de préstamos baratos, como el que se ha introducido en la enseñanza universitaria en Alemania, sustituyendo a la concesión

indiscriminada de sustanciosas becas a los universitarios, pueda ser un medio idóneo.

En todo caso, la pregunta sigue siendo hasta qué punto el Estado y las instituciones paraestatales son los instrumentos adecuados para prestar ayuda social. Desde Johanno Strasser y su libro sobre los límites del Estado social, no se puede pasar por alto el hecho de que en muchas ocasiones la política social burocratizada crea tantos problemas como los que efectivamente resuelve.

Por ello, la apuesta de Dahrendorf a favor de «la sociedad» y en contra «del Estado» tiene una especial actualidad y validez. «El Estado social debe dar paso a la sociedad social para conseguir una solidaridad que ya no viene impuesta desde arriba y que, precisamente por eso, es más eficaz, en los casos concretos, que todas las normativas estatales.» La propuesta de Dahrendorf apunta, pues, a la creación de «pequeñas redes sociales» portadoras de un sentido solidario más inmediato que la dudosa aportación al bien común que la abstracción coactiva del pago de impuestos pueda significar. La familia, el vecindario, los círculos de amigos, las diferentes asociaciones y grupos sociales deben hacerse cargo de aquellos ámbitos en los que la ayuda del Estado es, en el mejor de los casos, muy deficiente.

La propuesta de Dahrendorf vendría así, en principio, a confirmar la hoy ya célebre exclamación de Robert Nozick en favor de «¡menos Estado!». El Estado debe retirarse no sólo de la vida de los individuos, sino también de las instituciones y organizaciones si quiere de verdad fomentar la capacidad de iniciativa: se trata de conseguir una sociedad en la que el bien común es el resultado de la acción y del interés de muchos individuos y agrupaciones. Es preciso un cambio de mentalidad: incluso los empresarios privados piensan que la